RECOMENDACIÓN No. 22/2014

SÍNTESIS.- Cónyuge supérstite de servidor público que falleció en accidente laboral, se quejó de que a 3 años de haber recibido una pensión, el Ayuntamiento de Aquiles Serdán le disminuyó sustantivamente el pago de ésta.

Del proceso de investigación, las evidencias arrojaron que existen datos o elementos para presumir la probable violación al derecho a la legalidad, en la modalidad de afectaciones al derecho a la seguridad social.

Motivo por el cual se recomendó: **PRIMERO.-** A Usted, C. Jorge Adán Pérez Pérez, Presidente del Ayuntamiento de Aquiles Serdán, para que someta al H. Ayuntamiento, la adopción de las medidas tendientes a cumplir el acuerdo de cabildo tomado en la reunión en la sesión ordinaria celebrada el día dos de octubre del año dos mil seis, administración 2004-2007, en lo que se refiera al derecho de "A", a recibir la pensión decretada a su favor con motivo del fallecimiento de su cónyuge, quien en vida llevara el nombre de "C".

SEGUNDO.- A Usted mismo, se analice y resuelva sobre la pertinencia de que le sean cubiertas a "A", de manera retroactiva, todas las prestaciones de seguridad social que le correspondan en el tiempo que no le fueron debidamente otorgadas.

Expediente No. RAMD 404/2010
Oficio No. JLAG-289/2014

Chihuahua, Chih., 15 de diciembre del 2014
Visitador Ponente.- Lic. Luis Enrique Rodallegas Chávez

RECOMENDACION No. 22/2014

**C. JORGE ADÁN PÉREZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AQUILES SERDÁN, CHIH.
PRESENTE.-**

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6 fracción II inciso A, fracción III, 15 fracción I, 40 y 42 de la Ley de la Comisión Estatal de los derechos Humanos y considerando debidamente integrado el expediente RAMD 404/2010, relativo a la queja interpuesta por “A¹”, este organismo estatal procede a resolver de conformidad con los elementos de convicción que obran en el mismo, de la siguiente manera:

HECHOS:

PRIMERO.- El día ocho de octubre del año dos mil diez, compareció ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos “A”, para manifestar en vía de queja lo siguiente.

“(…) Que con fecha 2 de octubre del año 2006 me fue otorgada una pensión vitalicia por parte del Ayuntamiento de Aquiles Serdán, esto debido a que mi esposo de nombre “C” falleciera en un accidente de trabajo cuando se desempeñaba como Jefe de Alumbrado Público del municipio en mención.

¹ Por razones de confidencialidad y protección de datos personales en la presente recomendación, este organismo determinó guardar la reserva del nombre de la quejosa y demás datos de identidad que puedan conducir a ella, enlistando en documento anexo la información protegida.

“El caso es que a partir del día último del mes de octubre del presente año, me dispuse a cobrar mi pensión correspondiente, pero cuál es mi sorpresa que me encontré que sólo me habían depositado la cantidad de \$1,256.00 (mil doscientos cincuenta y seis

pesos), siendo que la cantidad correspondiente a mi pensión se me fijó por \$8,500 (ocho mil quinientos pesos), por lo que me vi en la necesidad de acudir con el Presidente Municipal de Aquiles Serdán, “D”, y al preguntarle el por qué se me había depositado nada más \$1,256 pesos, a lo que el presidente municipal me dijo [no hay dinero para darle la cantidad de \$8,500 pesos, si quiere meta una solicitud al cabildo y a ver qué pasa, pero de antemano le digo que no hay dinero].

Es por lo anteriormente expuesto que presento esta queja ya que considero que están siendo violados mis derechos humanos por parte del Presidente Municipal de Aquiles Serdán, en razón a que sin ninguna explicación el monto de mi pensión me fue rebajada, siendo que así quedó señalado en el propio Tribunal de Arbitraje Municipal de Aquiles Serdán y por más de cuatro años no había tenido ningún contratiempo para cobrar mi pensión, y ahora en cuanto “D” empieza su gestión, lo primero que hizo fue realizar una injustificada disminución a mi pensión, por lo que solicito su intervención para que estos hechos sean investigados y con ello se emita la recomendación correspondiente con el único fin de que se me pague lo que por ley me corresponde.”
...Rúbrica.

SEGUNDO.- Una vez solicitados los informes de ley, mediante oficio sin número de fecha dos de diciembre del año dos mil diez, el entonces Presidente Municipal de Aquiles Serdán, dio respuesta a los informes solicitados de la siguiente manera:

“(…) 1.- Es cierto que en el mes de octubre de este año se le depositó a “A” la cantidad de \$1,256.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pensión, misma que le corresponde, ya que quien fuera su esposo el Sr. “C”, falleció en un accidente trabajando para este Municipio, en la administración 2004-2007.

“2.- Es el caso de que este H. Ayuntamiento inició su ejercicio el día 10 de octubre de este año, haciendo una revisión de las personas a las que se les otorga pensión, encontrando que una de ellas es “A” por un monto de \$8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que le había concedido la administración del 2004-2007, sin embargo, por sesión del Cabildo de fecha 10 de noviembre del 2010, se acordó que esta Administración debe de otorgarle a la aquí quejosa la cantidad de \$1,256.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), que es

el monto que reciben otras personas por ese concepto, igualando a todas y cada una de ellas lo que deben de recibir mensualmente. Esta decisión se tomó toda vez que el Municipio no cuenta con los recursos suficientes para cubrir las cantidades que venían otorgando las anteriores administraciones.

Razón por la cual es que a “A” se le depositó la cantidad de \$1,256.00 (UN MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ATENTAMENTE SOLICITO:

“ÚNICO.- Se me tenga en tiempo y forma rindiendo informe respecto de la queja interpuesta por “A”, en los términos en que lo hago en el cuerpo de este escrito.” (...)
Rúbrica.

EVIDENCIAS:

1.- Escrito de queja signado por “A” en el cual se describen los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos, que dan origen a la presente resolución, los que se transcriben íntegros en el primer punto del capítulo que antecede (Foja 1).

2.- Oficio sin número de fecha dos de diciembre del año dos mil diez, por medio del cual “D”, entonces Presidente Municipal de Aquiles Serdán (fojas 12 a 13), da respuesta a los informes solicitados, cuyo contenido se transcribe en el segundo punto del capítulo de hechos.

3.- Copia simple del acuerdo celebrado el día 9 de octubre de 2006 ante el H. Tribunal de Arbitraje Municipal de Aquiles Serdán, entre “A” y “H”, este último a la sazón Presidente de la misma municipalidad (foja 2), convenio en el cual se asienta lo siguiente:

“ACUERDO: En Aquiles Serdán, municipio del mismo nombre, del Estado de Chihuahua, siendo las catorce horas con quince minutos del día nueve del mes de octubre del año dos mil seis, reunidos en el local que ocupa la Presidencia del H. Tribunal de Arbitraje Municipal de Aquiles Serdán, ubicado en la Avenida Juárez sin número del municipio de referencia, los CC. “E”, “F” y “G”, en su carácter de Presidente del H. Tribunal de Arbitraje de referencia, Representante de la Presidencia Municipal de Aquiles Serdán, Chih., y Representante de los Trabajadores al Servicio de dicha Autoridad Municipal, respectivamente, ante quienes comparecen los CC. “H”, en su carácter de Presidente Municipal de Aquiles Serdán, Chih., y las CC. “A”, “I” y “J”, quienes manifiestan que el propósito de su comparecencia ante este H. Tribunal de Arbitraje Municipal de Aquiles Serdán, Chih., es para ratificar ante el mismo, en todas y cada una de sus partes, el convenio celebrado por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO y “A”, en fecha dos de octubre del dos mil seis, mediante el

cual se otorga a esta ultima UNA PENSIÓN VITALICIA POR VIUDEZ, por la cantidad de \$8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.) mensuales, a cargo de la Presidencia Municipal de Aquiles Serdán, Chih., a partir del día veintiséis

de los corrientes, con motivo del fallecimiento del que fuera su esposo, y quien en vida llevara el nombre de "C", muerte ocurrida en accidente de trabajo. Que es todo lo que desean manifestar y para constancia firman, en unión de los miembros del H. Tribunal de Arbitraje Municipal de Aquiles Serdán, Chih., para los fines legales a que haya lugar."

4.- Copia simple de la certificación de ingresos por concepto de pensión alimenticia por viudez signada el día veinte de septiembre del año dos mil siete por "K", entonces Secretaria del H. Ayuntamiento de Aquiles Serdán (foja 3), documental en la cual literalmente se asienta lo siguiente:

"Que previa revisión minuciosa que se efectuó en los Archivos que obran en poder de esta Secretaría a mi cargo, se encontró el Libro de Actas de Cabildo correspondiente al día dos de octubre del año dos mil seis, en el que aparecen el Acta de Cabildo en la cual la Presidencia de este Municipio y los C.C. Regidores integrantes del H. Cabildo de la misma, acordaron por unanimidad, se concediera PENSIÓN VITALICIA a la Sra. "A", a partir del día veintisiete de ese mismo mes y año, en virtud a que el que fuera su esposo y en vida llevara el nombre de "C", falleció en accidente de trabajo ocurrido el día 25 de las fechas indicadas, mismo que se desempeñaba como Jefe del Departamento de Alumbrado Público Municipal, en la inteligencia de que dicha Pensión Vitalicia asciende a la suma de \$8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100) M. N., mensuales, teniendo además derecho al Servicio Médico en el Hospital General del Estado de Chihuahua, con independencia que por parte de sus hijos es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de Afiliación 33-01-84-9439-4656. Igualmente se encontró el convenio que la Presidencia Municipal de esta localidad y la interesada, firmaron de conformidad, en relación con la pensión a que se hace referencia, anexando copia notariada de este último documento, ante el titular de la Notaría No. Siete, en la Cd. de Chihuahua, Chih. C. LIC. "L"..." Rúbrica.

5.- Copia simple del acta correspondiente a la Sesión de Cabildo llevada a cabo en la Presidencia Municipal de Aquiles Serdán el día dos de octubre del año dos mil seis (fojas 7 y 7 bis), encabezado por el entonces Presidente de ese Municipio, "H", y en el orden del día en su punto número cinco (foja 7 a 7 bis) se anotó lo siguiente:

"...En relación al pago de dos empleados fallecidos por accidente de trabajo, uno era policía y el otro eléctrico. Tomando la palabra el Presidente Municipal, para decirnos que tenemos que pensionar a la esposa que compruebe con documentos oficiales que son las beneficiarias para poder darles el pago y su pensión, tomando la palabra la Profra. Ma. de los Ángeles Ponce Briones, hay que apoyarlos pero si tienen hijos chiquitos, quedando de acuerdo los Regidores en que se les dé una pensión vitalicia a partir del día veintiséis del presente mes y año, y lo que les corresponde por ley y

darles un documento bien redactado para respaldar a la viuda y no les quite nadie su pensión..."

C O N S I D E R A C I O N E S:

PRIMERA.- Este Organismo Estatal es competente para conocer y resolver en el presente asunto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1º, 3º, 6º fracción II inciso A de la Ley de la materia, así como en los numerales 78, 79 y 80 del Reglamento Interno de la propia institución.

SEGUNDA.- Que habiendo analizado las pruebas que integran el presente expediente, y valoradas en su conjunto de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, y en su caso de la legalidad, han llegado a producir convicción sobre los hechos materia de la queja según se razona en el presente capítulo.

TERCERA.- Corresponde analizar si los hechos planteados por la quejosa quedaron acreditados, para en su caso, determinar si los mismos son violatorios a sus derechos humanos.

Como hechos probados, tenemos que en fecha dos de octubre del año 2006, por acuerdo del Ayuntamiento de Aquiles Serdán, le fue otorgada una pensión vitalicia a "A", por un monto mensual de \$8,500.00 (ocho mil quinientos pesos), con cargo a la Presidencia Municipal, debido a que su esposo de nombre "C" falleciera en un accidente de trabajo, mientras se desempeñaba servidor público de dicha municipalidad. Acuerdo que fue ratificado ante el Tribunal de Arbitraje Municipal, el día 6 del mismo mes y año. Luego, a partir de octubre del año dos mil diez, se le redujo el monto de la pensión, para en lo sucesivo quedar en la cantidad de \$1,256.00 (mil doscientos cincuenta y seis pesos).

Así resulta, pues en ese sentido, el dicho de la quejosa es aceptado expresamente por la autoridad municipal al rendir su informe, y se ve apoyado además, con lo asentado en las documentales reseñadas en el apartado de hechos.

Dentro de ese contexto, lo que corresponde es analizar si el hecho de haberle reducido el monto de la pensión por viudez a "A", resulta conculcatorio a los derechos fundamentales de la impetrante.

Este organismo derecho humanista, atendiendo el principio de la lógica, advierte que a la hoy quejosa no le ha sido cubierta a cabalidad su pensión previamente acordada por el cuerpo edilicio y ratificada ante el Tribunal de Arbitraje Municipal correspondiente, ello al haber reducido unilateralmente su monto, tal como lo acepta expresamente el

otrora Presidente Municipal, situación que es claramente violatoria a sus derechos humanos, al tratarse de un acto de autoridad sin la debida fundamentación y motivación, que le causa una afectación en su esfera de intereses, en contravención al derecho a la legalidad consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna.

Lo asentado en el cuerpo del informe de la autoridad, deja de manifiesto la negativa por parte del C. Presidente Municipal de Aquiles Serdán, de cumplir con el referido acuerdo de los miembros del Ayuntamiento de Aquiles Serdán en Sesión de Cabildos, posteriormente ratificado ante el Tribunal de Arbitraje Municipal. Ello bajo el único argumento de que la pensión se redujo al monto que reciben otras personas por similar concepto, debido a la falta de recursos de dicho municipio para “...cubrir las cantidades que venían otorgando las anteriores administraciones...”

En el presente caso, se le está afectando a la peticionaria, respecto a un derecho consolidado e indiscutible, a recibir una pensión por su estado de viudez, que con anterioridad había acordado a su favor la autoridad municipal, para ahora, mediante una determinación unilateral carente de fundamentación, adoptada por diverso titular de la misma autoridad municipal, reducir sustancialmente el monto de la misma, ello sin que medie un juicio o procedimiento alguno en el que la interesada haya sido escuchada y vencida.

Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales:

“AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. NO PUEDEN REVOCAR SUS PROPIOS ACUERDOS. Las autoridades administrativas no pueden revocar sus propios acuerdos, cuando estos han creado derechos en favor de tercero.”

Tesis Aislada con número de registro 268188, de la Segunda Sala, en la sexta época, en el Semanario Judicial de la Federación Volumen XXV, Tercera Parte, página 30.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL NO PUEDE CONSIDERARSE SUPERIOR JERÁRQUICO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, PARA EFECTOS DE SU CUMPLIMIENTO. El artículo 194 de la nueva Ley de Amparo establece que se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable el que, de conformidad con las disposiciones correspondientes, ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia, o bien, para cumplirla por sí misma; sin embargo, de acuerdo con los artículos 77, 78 y 29 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que prevén la existencia de los tribunales de arbitraje, así como las facultades y obligaciones del presidente municipal, es factible establecer que éste no ejerce sobre el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de la entidad, un poder o mando para obligarlo a actuar en la forma exigida en la ejecutoria de amparo, o bien, para cumplirla por sí mismo, por lo que dicho tribunal es autónomo en el ámbito jurídico y, por ende, no tiene superior jerárquico, para los efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo.

Tesis XVII.1o.C.T.17 K (10ª.), libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1903.

De igual manera, se advierte que además de haberse tomado una decisión unilateral por parte del entonces Presidente Municipal para reducir el monto de la pensión asignada por viudez, no se alude al menos a algún criterio objetivo y razonable, que justifique o pretenda justificar el por qué de la disminución tan desproporcionada, de ocho mil quinientos pesos a la ínfima cantidad de mil doscientos sesenta y cinco pesos, circunstancia que viene a robustecer la falta de motivación para afectar a la hoy quejosa en sus derechos adquiridos en materia de seguridad social.

CUARTA.- Es preciso señalar que los hechos materia de análisis, constituyen un incumplimiento a las prestaciones en materia de seguridad social, hipótesis respecto a la que este organismo posee competencia para conocer, incluso el Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de Derechos Humanos, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la prevé en su apartado 3.2.11.2 denominado incumplimiento de prestaciones de seguridad social.

Las prestaciones que deriven del derecho a la seguridad social, en todo momento se deben proporcionar atendiendo a la dignidad y naturaleza humana por ser medidas protectoras que atienden a las condiciones y calidad de vida de los trabajadores o en su caso, a los beneficiarios, y que no constituyen por sí mismas prestaciones laborales en sentido estricto, producto de la relación de trabajo que establezcan pugna en rubros relacionados con: percepciones salariales, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional o de antigüedad, entre otras.

Por el contrario, las prestaciones de seguridad social tienen por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el aludido derecho a la seguridad social, mientras que el numeral 16 prevé el derecho a la legalidad.

En el ámbito internacional, existen diversas declaraciones y tratados Internacionales que fueron debidamente ratificados por el Senado de la República, convirtiéndolos por ello en disposiciones de observancia general y obligatoria. Por citar algunas de ellas, tenemos en primera instancia la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en 1948 en Bogotá, Colombia, la cual en su artículo XVI, referente a los "DERECHOS A

LA SEGURIDAD SOCIAL”, establece que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad la imposibilite, física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”

Así también, tenemos que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el cual fue adoptado el 17 de noviembre de 1988, y ratificado por nuestro país el 16 de abril de 1996, en su artículo 9 establece al referirse al derecho a la seguridad social, lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidente de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.”

Además, el referido derecho se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1966 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y vinculante para nuestro país a partir del 23 de marzo de 1981, en cuyo artículo 9 se establece que: “los Estados reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social.”

Considerando que en los términos de lo establecido en el artículo 29 fracción III del Código Municipal para el Estado, corresponde el Presidente Municipal informar oportunamente al Ayuntamiento, acerca de la ejecución de los acuerdos aprobados; además en los términos del ya referido numeral, pero en su fracción I, le corresponde presidir las sesiones, razón por la cual resulta procedente enviarle la presente resolución.

Atendiendo a los razonamientos y consideraciones antes detallados, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos estima que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional, se desprenden evidencias suficientes para considerar violados los derechos fundamentales de “A”, específicamente el derecho a la legalidad, así como un incumplimiento a prestaciones en materia de seguridad social, por lo que en consecuencia, respetuosamente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente emitir las siguientes:

RECOMENDACIONES:

PRIMERO.- A Usted, **C. Jorge Adán Pérez Pérez**, Presidente del Ayuntamiento de Aquilés Serdán, para que someta al H. Ayuntamiento, la adopción de las medidas tendientes a cumplir el acuerdo de cabildo tomado en la reunión en la sesión ordinaria celebrada el día dos de octubre del año dos mil seis, administración 2004-2007, en lo que se refiera al derecho de “**A**”, a recibir la pensión decretada a su favor con motivo del fallecimiento de su cónyuge, quien en vida llevara el nombre de “**C**”.

SEGUNDO.- A Usted mismo, se analice y resuelva sobre la pertinencia de que le sean cubiertas a “**A**”, de manera retroactiva, todas las prestaciones de seguridad social que le correspondan en el tiempo que no le fueron debidamente otorgadas.

La presente Recomendación, de conformidad con lo señalado por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 44 primer párrafo de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es pública y con tal carácter se encuentra en la gaceta que publica este Organismo y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus facultades que expresamente les confiere la ley como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.

Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar las instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que, con su cumplimiento, adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto a los Derechos Humanos.

De conformidad con el artículo 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, nos sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a esta notificación.

Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma.

La falta de presentación de las pruebas dará lugar a que se interprete que la Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública esta circunstancia.

No dudando de su buena disposición para que sea aceptada y cumplida.

ATENTAMENTE

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

c. c. p.- Quejosa.- Para su conocimiento.
c. c. p.- Lic. José Alarcón Ornelas, de Secretario Técnico de la CEDH.
c. c. p.- Gaceta.